

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México, por los defensores de Andres Olivares y Cayetano Suarez, contra el C. Gobernador del Distrito federal que los juzga como salteadores en despoblado, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el Juzgado mandó recibir á prueba el presente juicio por el término de la ley. La cuestion está concretada á lo siguiente: ¿El lugar en que fué robado D. Enrique Fresarion la tarde del dia 16 de Febrero en la calzada de Chapultepec, es poblado ó despoblado? Resuelta esta cuestion, ya facilmente se desprende á que autoridad tocaba el juzgar á los reos de ese delito, si á la política ó á la judicial. Los abogados defensores de los quejosos, presentaron las pruebas, que obran en el cuaderno respectivo; y como el que suscribe está conforme en su análisis, es inútil repetirlo. En su vista y en el del alegato, puede el Juzgado pronunciar la sentencia para que estamos citados, no preocupándose el punto de culpabilidad de los acusados. México, Abril 29 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno.* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Mayo 3 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por los Ciudadanos Licenciados Ignacio Sierra, Luis G. de la Sierra y Amado Osio, defensor el primero de Andres Olivares, y el segundo y tercero de Cayetano Suarez; quejándose, de que habiendo sus defendidos perpetrado

un robo, la tarde del 17 de Febrero último entre la curva del Ferrocarril de Tlalpam y la Calzada de la Reforma, se les estaba procesando por el C. Gobernador del Distrito, con arreglo á la ley de 23 de Mayo del año anterior, calificando de despoblado el lugar del delito; de salteadores con esa agravante circunstancia, á Suarez y á Olivares, y apoyado en ella para juzgarlos, violando en las personas de estos las garantías consignadas en los artículos 13, 20 y 21 de la Constitucion política de los Estados-Unidos Mexicanos. Vistos: el informe con justificacion, rendido por el mencionado funcionario; lo que alegan los patronos de los reos con la prueba que dieron; lo que pide el representante del Ministerio público y demas constancias del proceso, á que en lo necesario me refiero; y Considerando: que como por la legislacion antigua se imponía la pena de muerte á los salteadores que en cuadrilla robaban en los caminos ó poblados, se comprende facilmente, que el Poder Legislativo al sancionar y el Ejecutivo al mandar se cumpla la expresada ley de Mayo, cuyo funesto origen y laudable objeto son demasiado conocidos; quiso en su artículo 8º, hacer extensiva la pena en odio de aquel crimen, y para evitar su repeticion, aun á los que al ejecutarlo no se reunieran en cuadrilla, así como á los que lo perpetraran en lugares poblados, sin que entre los efectos de que trata dicho artículo 8º, haya motivo ostensible para dudar acerca del punto jurisdiccional claro y bien definido en el artículo 8º, que establece como única base el diverso carácter de los agentes aprehensores.—Que el mayor ó menor número de concurrentes á un lugar determinado en ciertas horas del dia, podrá disminuir el peligro de ser asaltados los transeuntes; pero no convertirlo en poblado cuando sus pocos habitantes no pueden prestar oportuno auxilio, y cuando la fuerza pública, aun para seguridad de ellos mismos, está obligada á defenderlos, situando escoltas en los parajes en que es fácil una sorpresa, como la que

sufrieron los acusadores de Olivares y Suarez, sin embargo de no encontrarse á gran distancia de la fuerza armada, y cuya circunstancia si bien no prueba que el crimen se cometiera en lugar poblado, sí acredita el arrojé de los ladrones, del que sabrá hacer el mérito debido el Juez que haya de sentenciarlos. Que estando suspensas las garantías individuales de que habla la citada ley en su artículo primero, y el C. Gobernador del Distrito obligado á seguir el procedimiento especial designado en ella, no existe la violación de que hacen mérito los patronos de los reos. Por cuyas consideraciones debía de declarar y declaro: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Andres Olivares y á Cayetano Suarez, contra el acto que motiva este recurso. Notificada la sentencia y hecha su publicación en la forma acostumbrada, dese cuenta á la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El C. Juez de Distrito lo mandó y firmó. Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de esta ciudad por los defensores de Andres Olivares y Cayetano Suarez, contra el Gobernador del Distrito que los juzga como ladrones en despoblado, por estar acusados de haber asaltado y robado á Mr. Enrique Fresarién, á su hijo y á su criado, la tarde del 16 de Febrero último, en el tramo que hay entre la calzada de la Reforma y la curva del ferro-carril de Tlalpam; y considerando: que según las constancias del expediente, el Gobernador del Distrito procede dentro de la órbita de sus facultades, y por consiguiente, que su

procedimiento no vulnera ninguna de las garantías que invocan los quejosos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 3 del actual por el Juez 1º de Distrito de esta ciudad, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Andres Olivares y á Cayetano Suarez, contra el acto que motiva este recurso.—Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogasón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Azaú.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasco.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Rosalío Delgado contra el C. Administrador de contribuciones directas del Estado por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Estando dispuesto en el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que no cabe el amparo en negocios judiciales, á cuya clase